



DELINCUENCIA ORGANIZADA, PARAMILITARES Y NARCOPARAMILITARES

LA DISPUTA POR CHIAPAS

RIVELINO RUEDA Y ERNESTO MUÑOZ | ENVIADOS

¿PARA DÓNDE HACERSE? ES EL DILEMA PARA POBLADORES DE LA TRINITARIA, LAS MARGARITAS... LA COMANDANCIA ZAPATISTA YA SE DECLARÓ EN ALERTA MÁXIMA

COBERTURA ESPECIAL



AMATENANGO DE LA FRONTERA. La crisis humanitaria en Chiapas, derivada de la violencia provocada por la delincuencia organizada, paramilitares y narcoparamilitares, anota la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Dora Robledo, ha llegado al grado "que la gente tenga que estar pensando a qué organización criminal apoyar para que no le hagan nada, ni a ellos ni a sus familias".

"La gente tiene bien identificados a los grupos criminales, y aquí el asunto es que ya se comenta que los de Sinaloa los tratan mejor que los de Jalisco. La gente misma está diciendo: 'No va a haber de otra. Así se va a quedar esto. Y nos tenemos que acostumbrar con uno o con otro'. De ese

tamaño está la situación", explica la activista.

Durante 13 días, en un recorrido de mil 537 kilómetros por 53 de los 124 municipios de Chiapas, El Sol de México constató el dilema que se repite hacia La Trinitaria, Las Margaritas, Comitán: ¿Para dónde hacerse? ¿A quién respaldar? El riesgo latente es que estas organizaciones delictivas —dicen los pobladores, dicen los organismos de derechos humanos, dicen las autoridades— ya comenzaron a cimentar una "base social" en Chiapas.

Darío, habitante de Bejucal de Ocampo (quien por seguridad pide el anonimato), habla de la gente que ya vive de los negocios de estos grupos. "Unos dan 'pitazos', otros almacenan, otros compran y venden, otros transportan. Ya muchos andan armados. Nomás es cuestión de fijarse bien. Aquí los conocemos y conocemos a los de poblaciones cercanas. ¿Y cómo no va a ser así? Por acá hay muchas necesidades. Eso ellos lo aprovechan".

Chiapas sigue en la cima de los estados más rezagados, en la última medición de los índices de pobreza en el país, de 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que de los 5.5 millones de habitantes de la entidad, 4.2 viven en situación de pobreza.

"Chiapas está en guerra", alertó a mediados de junio la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Días antes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzó un comunicado: "Chiapas está al filo de una guerra civil". Milicianos zapatistas en los puntos de acceso a los caracoles de Oventic, Moisés y Gandhi y Guadalupe Tepeyac confirmaron que la comandancia decretó la "alerta máxima" por los continuos ataques de grupos paramilitares y del crimen organizado a sus bases de apoyo. "Son órdenes de la comandancia", dicen. **FIND**



PERIÓDICO

PÁGINA

FECHA

SECCIÓN

El Sol de México

PP-1-5-12

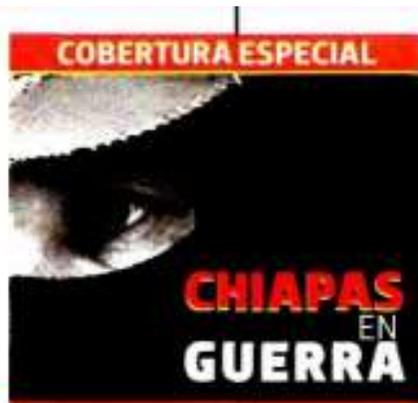
30/07/2023

NACIONAL



COBERTURA ESPECIAL/ RIVELINO RUEDA Y ERNESTO MUÑOZ, ENVIADOS

CHIAPAS, OTRA VEZ EN GUERRA



RIVELINO RUEDA Y ERNESTO MUÑOZ
ENVIADOS ESPECIALES

AMATENANGO DE LA FRONTERA.- La camioneta con las siglas de la Policía Estatal a un costado de la carretera, los uniformes aparentemente oficiales de dicha corporación y las armas de alto poder que portan los elementos que marcan el alto a los autos que circulan por la vía Motozintla-Frontera Comalapa parecen no dejar dudas: es un retén de rutina tras los cruentos enfrentamientos de finales de mayo en esta zona entre los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CING).

También es de rutina orillar el auto y levantar evidencia. La revisión es solamente con la mirada. Otros conductores pasan sin problemas, incluso algunos saludan o intercambian breves diálogos con los supuestos oficiales.

Son cuatro hombres. Tres descubiertos del rostro y uno con pasamontañas. El que oculta su cara es el que está más cerca de la camioneta con las siglas de la Policía Estatal: un vehículo destartado, sin la estructura tubular que caracteriza a este tipo de vehículos y que regularmente se encuentran en la parte trasera de esas camionetas tipo pick up.

El individuo del pasamontañas hace preguntas. Duda al ver la cámara fotográfica, pero accede a una conversación. Dice que sí, que "la zona está muy caliente, y más para allá adelante, para Comalapa".

Todo es normal hasta que se identifica un detalle. Luego varias piezas que no encajan. El hombre no porta ni una placa, ni una identificación oficial colgando del cuello, ni su

nombre bordado en el chaleco antibalas.

En su lugar hay una gruesa cadena de metal y un colgijie de la Santa Muerte. En el chaleco azul marino tampoco hay una insignia de la Policía Estatal. Lo que se observa es un escudo rectangular partido en dos: de un lado, la bandera nacional, del otro, el cráneo de una esqueleto.

La uña del dedo meñique de su mano izquierda tiene unos cinco centímetros de largo. A los costados de los pantalones, en bolsas tácticas, se dejan ver, despa-ramados, diversos cargadores y cartuchos.

Comienza la tensión. Por las fotografías que se les toman. Por el tiempo transcurrido. Por la charla improvisada. Por el sudor que comienza a descender a chorros de la frente, de las sienes, del cuello.

"¡Vámonos!" "¡Vámonos!", grita otro supuesto policía, pero éste con uniforme café caquí. Luego levanta el fusil por encima de su cabeza. Luego apunta el fusil hacia un punto impreciso. Luego comienza a grabar. Los otros dos hombres, uno con uniforme negro y el otro azul oscuro, se mueven nerviosos.

—¿Ya se van?— pregunta el fotorreportero.

—Nosotros sí. No sé si ustedes se quieren quedar— revira uno de ellos, amenazante.

El hombre del pasamontañas estrecha la mano y se despide. Anota las placas del auto y las envía a un grupo de WhatsApp. Dos de sus compañeros graban video y también mandan el material de sus teléfonos móviles.

"Ya nos vamos. Ya hace hambre", dice el del pasamontañas negro. Reitera que la cosa "está caliente" y que esa carretera es "muy peligrosa".

"Allá adelante hay otro retén de ministeriales. Cuidado con ellos porque no han comido. Han de tener mucha hambre", comenta con una risa burlona que se atasca en la máscara de nylon que le cubre el rostro.

A 32 kilómetros de ese punto, en la entrada al municipio de Frontera Comalapa, aparece un retén del Ejército. Es el único que se encuentra en ese tramo que inicia desde el entronque de la autopista que va a Arriaga y luego a Tuxtla Gutiérrez.

El responsable del puesto militar observa las fotografías. Mueve la cabeza y lanza la orden a un subalterno: "¡Envíe una patrulla para allá!"

Cinco días más tarde, en San Cristóbal de las Casas, Dora Hobledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), escucha la historia. No lo duda: "Son miembros de 'El Maíz'. Ya tenemos varios reportes de que así operan en esa carretera".

—¿"El Maíz"?



—Sí. Los que provocaron el caos en los enfrentamientos de finales de mayo entre el CING y el CDS, precisamente en esa carretera.

"El Maz" —añade— es un brazo armado de los del Cártel Jalisco. Son los que levantaron a pobladores de Comalapa y otros pueblos, los que los reclutaron forzosamente para hacer bloqueos con autos incendiados, los que provocaron el desplazamiento de al menos tres mil personas en Frontera Comalapa".

Esa vía serpenteante, que abruptamente pasa de la neblina al calor de cuarenta grados a la sombra, en la planicie de Motozintla, hoy es tierra de nadie.

Las motocicletas que están a un lado de la carretera que va de Tapachula a Frontera Comalapa, y de ahí hasta San Cristóbal de las Casas, pareciera que están abandonadas. Nadie está cerca de esos vehículos. Esa es la impresión.

Pero detrás de los árboles, a un costado de piedras enormes, entre la tupida maleza, están los conductores de esas motos.

Son —dicen los pobladores de las comunidades, los miembros de Protección Civil, los que tienen pequeños negocios en esa vía— los "halcones" de los grupos criminales que se disputan la plaza, de este estratégico corredor para el trasiego de drogas, armas, migrantes y huachicol.

Algunos vigías, pocos, se dejan ver arriba de las motos, con sus teléfonos móviles, realizando llamadas, enviando mensajes, observando, siempre observando movimientos extraños, los vehículos que circulan, los rostros de quienes viajan en ellos.

Otros van y vienen. Rebasan los autos y las camionetas a gran velocidad y echan un rápido vistazo hacia el interior. Todos los tramos de esta vía están vigilados por esos "halcones", del entronque de la autopista que va hacia Arriaga y Tuxtla Gutiérrez a Motozintla. De Motozintla a Frontera Comalapa. De ahí a La Trinitaria. Luego hacia Comitán, Atenango del Valle, Teopisca y San Cristóbal de las Casas.

Por esta ruta, a la altura del Puente Mazapa de Madero, todavía están las huellas del enfrentamiento armado que tuvieron las dos organizaciones criminales que se disputan el estado de Chiapas: el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CING).

Sobre el acotamiento de la carretera aún permanecen los esqueletos de dos taxis de Motozintla que fueron incendiados y utilizados por el grupo criminal "El Maz" para realizar uno de los diversos bloqueos que se registraron en esta vía a finales de mayo.

"Se venden refrescos, dulces y gasolina", ofrecen innumerables negocios. Diez litros de magna por 250 pesos.

Los garrafones de plástico del tráfico hormiga de huachicol ya se ofrecen sin ningún rubor, a la vista de autoridades y fuerzas de seguridad.

Aquí, parece, este y otros negocios ilícitos llegaron para quedarse.

UNA BASE SOCIAL: DECIDIR ENTRE CÁRTELES

Todavía traen los rostros desencajados y la mirada ausente. Uno de plano se da golpecitos en las sienes con los dedos medio e índice de su mano izquierda. No logra entender cómo se llegó hasta este punto. No alcanza a dilucidar por qué, hoy, las poblaciones de la frontera chiapaneca tienen que decidir si apoyan a los del Cártel Jalisco Nueva Generación (CING) o a los del Cártel de Sinaloa (CDS).

El hombre se atraganta su coraje, su rabia. No da crédito a que, ante la permisividad de las autoridades, ante su inacción, ante lo que pareciera "su complicidad", "aquí (en Motozintla), en Chamich, en Paso Hondo, en Chicomuselo, en Huixtla, en Comalapa, el pueblo tenga que estar decidiendo sobre qué grupo criminal nos trata mejor para respaldarlo".

La crisis humanitaria en Chiapas, derivada de la violencia de diversos grupos de la delincuencia organizada, paramilitares y narcoparamilitares, anota la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Dora Robledo, ha llegado hasta el grado "que la gente tenga que estar pensando a qué organización criminal apoyar para que no le hagan nada, ni a ellos ni a sus familias".

"La gente en esa región tiene bien identificados a los grupos criminales, y aquí el asunto es que ya se comenta que los de Sinaloa los tratan mejor que los de Jalisco. La gente misma está diciendo: 'No va a haber de otra. Así se va a quedar esto. Y nos tenemos que acostumbrar con uno o con otro. De ese tamaño está la situación'".

El dilema se repite hacia La Trinitaria, hacia las Margaritas, hacia Comitán: ¿Para dónde hacerse? ¿A quién respaldar? El riesgo latente es que estas organizaciones delictivas —dicen los pobladores, dicen los organismos de derechos humanos, dicen las autoridades— ya comenzaron a cimentar una "base social" en Chiapas.

Andrés Manuel López Obrador, incluso, ha reconocido este fenómeno. En su conferencia matutina del 12 de julio en Palacio Nacional, el mandatario dijo que en algunos municipios de la entidad, como Benemérito de las Américas, la delincuencia organizada ha logrado obtener apoyo y respaldo de sectores de la población.

"Benemérito de las Américas es un municipio limítrofe con Guatemala. En algunas comunidades, no en todas, la delincuencia organizada tiene base social. La gente les apoya, al grado de que hay pistas clandestinas donde bajan cocaína", mencionó el presidente.

Pobladores de este corredor fronterizo no coinciden con López Obrador. La base social que ha construido el



crimen organizado es amplia, muy amplia.

Dario (pide el anonimato por razones de seguridad), habitante de Bejuca de Ocampo, dice que la gente que ya vive de los negocios de estos grupos realiza diversas funciones: "balcones", mototaxistas, taxistas, choferes de transporte público (camionetas tipo Van que se observan por todo el estado), vendedores de "huachicol", propietarios de comercios que instalan sus puestos al pie de la carretera...

"Unos dan 'pitazos', otros almacenan, otros compran y venden, otros transportan. Ya muchos andan armados. Nomás es cuestión de fijarse bien. Aquí los conocemos y conocemos a los de poblaciones cercanas. ¿Y cómo no va a ser así? Por acá hay muchas necesidades. Eso ellos lo aprovechan".

Chiapas sigue en la cima de los estados más pobres de México. En la última medición sobre los índices de pobreza en el país, de 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que de los 5.5 millones de habitantes que tiene la entidad, 4.2 viven en situación de pobreza.

Dora Robledo, directora del Frayba, expone que lo que ha observado y documentado en los últimos años ese organismo de derechos humanos es que esa base social del crimen organizado "se está construyendo con jóvenes hombres principalmente".

"A estos jovencitos que no tienen una alternativa para estudiar, para trabajar, pues se les hace más fácil unirse a estos grupos. Lo que estamos observando es que, por ejemplo, estas organizaciones delictivas les dan motos, les dan dinero, les dan armas, les dan drogas, como el caso de 'Los Motonetos', en San Cristóbal de las Casas".

Los fenómenos sociales son latentes. La desculturización en las comunidades y el incremento en el consumo de alcohol y drogas son visibles desde el municipio de Suchiate hasta Maravilla Tenejapa, de Amatenango de la Frontera a San Cristóbal de las Casas; de San Juan Chamula a Pantelhó; de Las Margaritas hasta Altamirano; de Ocosingo a Palenque.

Cientos de muchachitos deambulan por carreteras, calles, veredas y caminos embrutecidos por el posh u otro tipo de aguardiente; por drogas como el crack, la cocaína, los psicotrópicos y los inhalantes. Otros más yacen en plazas, banquetas, vados de carreteras, totalmente fuera de sí. Todos ya enfundados con ropas tipo vaquero o portando ajustados pantalones de mezclilla, zapatos tenis y chamarras de piel.

"Esta es otra de las cosas", dice Dario con la vista al piso, "que trajo consigo el crimen organizado; haga de cuenta como una nueva conquista".

ACTEAL A GRAN ESCALA

En Chiapas se configura un Acteal a gran escala. La situación que prevalece en la entidad es la antesala de una

tragedia de grandes proporciones que han anunciado con antelación organismos de derechos humanos, académicos, especialistas y organizaciones sociales.

Hace casi 26 años, semanas antes de la dolorosa masacre de Acteal (22 de diciembre de 1997), donde 45 indígenas trotziles de la organización "Las Abejas" en situación de desplazamiento forzado, entre ellos niños y mujeres embarazadas, fueron asesinados por grupos paramilitares, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación anunciaron con antelación sobre una potencial tragedia.

Hoy, en Chiapas, se configura el mismo escenario. Las voces que alertan sobre una o diversos hechos similares a los de Acteal, con el inquietante elemento de la penetración que ha tenido el crimen organizado en distintas regiones del estado, con la complicidad o la permisividad de distintos actores políticos y económicos, han sido calificadas de "mentirosas" o "exageradas" por las autoridades.

La actitud de los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilo Escandón Cárdenas ante ese escenario ha sido la de minimizar el problema y descalificar a los que han lanzado las llamadas de alerta.

"Se ha exagerado lo que sucede en Chiapas en los últimos tiempos", revirtió López Obrador en su conferencia matutina el pasado 12 de julio.

Durante 13 días, **El Sol de México** realizó un recorrido de mil 537 kilómetros por distintas regiones de Chiapas (53 municipios de 124 con los que cuenta el estado) y pudo constatar que dicha entidad se encuentra inmersa en diversas y complejas problemáticas que han sacudido los cimientos del endeble tejido social en esta región, donde se sumó desde hace por lo menos una década un factor determinante y sumamente riesgoso: el crimen organizado enraizando una base social.

"Chiapas está en guerra", resumió a mediados de junio la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también se pronunció sobre la crisis humanitaria y de violencia que atraviesa el estado. El 1 de junio señaló, en un comunicado, que "Chiapas está al filo de una guerra civil".

Este diario también pudo constatar que la organización insurgente, incluso, decretó la "alerta máxima" en todos sus "caracoles" y comunidades autónomas, así como el cierre total de estos enclaves por los continuos ataques de grupos paramilitares y del crimen organizado a sus bases de apoyo.

"Son órdenes de la comandancia, que se tomaron en asambleas", comentan milicianos zapatistas en los puntos de acceso a los caracoles de Oventic, Moisés y Gandhi y Guadalupe Tepeyac.

En la zona fronteriza con Guatemala y en los corredores hacia el norte del país, el tema de la migración y los negocios criminales que los grupos de la delincuencia or-



ganizada han confeccionado en torno a este fenómeno es latente. El tráfico de armas de alto poder que ingresan por la porosa línea fronteriza del sur y que llegan a diversos grupos civiles que han aparecido en los últimos meses y que dicen enarbolar distintas demandas han sido denunciadas con anticipación por pobladores y organismos de derechos humanos.

Otros factores que se suman a esta "bomba de tiempo" llamada Chiapas es la presencia de organizaciones multinacionales del crimen en todo el territorio chiapaneco. También, el paramilitarismo y narcoparamilitarismo auspiciado y tolerado por autoridades federales, locales y fuerzas armadas (Ejército, Marina, Guardia Nacional).

Un aspecto delicado que pudo recabar este diario a través de distintos testimonios, es el adiestramiento de estos grupos criminales por parte de actores externos, como excombatientes del comando de élite de la milicia guatemalteca "kaibiles", responsables de diversas masacres durante la última etapa de la guerra civil que asoló aquella nación centroamericana, a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado.

En Chiapas el crimen organizado se desmenuza a sus anchas a partir de la diversificación de negocios lícitos e ilícitos.

La trata de personas es un asunto alarmante, de acuerdo con pobladores y defensores de derechos humanos, especialmente en contra de migrantes y de jovencitas indígenas que son secuestradas y obligadas a prostituirse o a ejercer la llamada "etno-pornografía", que luego se distribuye en formatos digitales en mercados y tangüis de San Cristóbal de las Casas y de San Juan Chamula.

Todo ello ha provocado un fenómeno desolador en la entidad: el desplazamiento forzado de miles de personas por la ola de terror impuesta por los grupos criminales, paramilitares, narcoparamilitares, "brazos armados", sicarios y organizaciones delictivas de nuevo cuño.

En su informe Chiapas, un desastre, de marzo de 2023, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) cifra el número de desplazados en la entidad en 16 mil 755 personas entre 2010 y octubre de 2022, específicamente en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Pantelhó, Chenalhó, Chapultenango, Chicomuselo y Frontera Comalapa, así como en la comunidad zapatista Patria Nueva, en el municipio de Ocosingo.

Frente a este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia matutina del 23 de junio, en Tuxtla Gutiérrez, que en Chiapas "hay mucho respeto entre la gente; no se han perdido costumbres, tradiciones; no se ha roto el tejido social, hay vida comunitaria, hay mucha cultura, y esto mantiene a Chiapas como un estado tranquilo".

Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), comentó ese mismo día que "todos los delitos en Chiapas están a la baja" y que está en el sitio 22

de las 32 entidades federativas en niveles de inseguridad, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En Chiapas, dijo el general, el total de elementos de las fuerzas federales y estatales que están desplegados en el estado es de 23 mil 821 de los cuales ocho mil 283 pertenecen al Ejército y Fuerza Aérea, mil 823 a la Marina, cuatro mil 932 a la Guardia Nacional y ocho mil 783 efectivos de las policías municipales y la estatal.

Aquí el asunto --anota Dora Hobbledo, directora del Centro Frayba-- es que las fuerzas de seguridad no están en las zonas de conflicto. "Están en las autopistas, en el Tren Maya, en las zonas turísticas, en los aeropuertos, en los retenes migratorios, no así donde la violencia del crimen organizado y paramilitares ya rebasó a todos, como en los casos de Chicomuselo, Frontera Comalapa o Pantelhó".

PANTELHO HUELE A MIEDO Y A ZOZOBRA

El hombre de unos cincuenta años que pide un aventón de la comunidad de Polhó a Pantelhó no habla mucho. Luego, cuando se escucha el trepidar de un helicóptero que sobrevuela la zona, a la altura de la comunidad de Acteal, suelta unas palabras que traía atoradas: "Está todo revuelto, pero ya no queremos a 'Machete'. Tampoco queremos a los otros delincuentes".

Los deslaves de los cerros cercanos al municipio ocupan uno o dos carriles de la estrecha carretera. La niebla y una ligera llovizna dificultan la marcha. Y el hombre de unos cincuenta años, quien opta por no dar su nombre por temor a represalias, comienza a balbucear cosas ininteligibles, luego más claras: "Ya muchos están huyendo por violencia".

--¿A dónde?

--Chenalhó, Polhó, San Cristóbal (de las Casas)... Aquí adelante bajo.

La desconfianza y el miedo se respiran en este territorio, pero se acentúan cuando se observa el retén del Ejército y de la Guardia Nacional a unos metros de la garita de entrada al municipio y, luego, unos pasos más para allá, sobre la calle principal de Pantelhó, cuando se detecta a unos seis soldados detrás de trincheras improvisadas con costales de arena, mero afuerita de las casas.

Es sábado después del mediodía y la zozobra en esta plaza palpita con el silencio de sus calles. Pocos, muy pocos salen de sus casas. Unos observan los movimientos de los elementos del Ejército, la GN y la Policía Estatal al pie del Palacio Municipal, asegurado desde hace cinco días por las fuerzas de seguridad. Otros apuran el paso ante las preguntas y se escabullen entre las callejuelas desiertas.

Uno de los policías estatales que resguarda el Palacio Municipal pone la mano en el pecho cuando se intenta ingresar al edificio del ayuntamiento, abandonado a su suerte. Detiene con fuerza. Se huele el miedo que emana



de sus poros. "¡No hay paso!" Y repite lo mismo, mecánicamente, cuando se le pregunta si hay alguien ahí adentro.

Dos hombres miran el despliegue desde una tienda de abarrotes en la esquina de la plaza principal. "No. Ahorita ya no hay nadie en la Presidencia Municipal. Todos se fueron. Dicen que andan por los montes". Otros cuatro huyen en estampida cuando observan la cámara fotográfica. Se meten a tropezones a una casa que está a un costado de la Iglesia Santa Catarina de Pantelhó.

Uno más, alcoholizado, desciende como puede las escaleras del kiosco de la plaza central. Aturdido, temeroso, con los ojos inyectados de sangre, lanza un alarido seco, estremecedor: "¡No hay nadie!" "¡Larguense!"

—¿Y los del "Machete" (grupo que se denominó de "autodefensa" y tomó el poder de la alcaldía desde julio de 2021, tras "levantar" y desaparecer a 19 pobladores de Pantelhó)?—se le inquiriere al hombre que observa desde la tienda de abarrotes.

—Nadie sabe dónde se fueron. A esos ya nadie los quiere. Son delincuentes. Corrieron para los montes cuando llegó Ejército.

El hombre volteo nervioso. En otra esquina de la plaza, detrás de una jardinera, lo observan cuatro jóvenes que cuchichean entre ellos y mandan mensajes de sus celulares. Tampoco le quitan la vista de encima los elementos de la Guardia Nacional apostados alrededor del kiosco.

De los otros, del grupo denominado "Ejército Civil del Pueblo Indígena", y de los otros dos que aparecieron días después para apoyar a "El Machete" y a las autoridades municipales, también dice que son "delincuentes".

"Fuera sicarios", se lee en la pared de un inmueble que fue incendiado y que está a un costado de la Presidencia Municipal.

Una mujer que pasa por el lugar dice que está más tranquila con la presencia de los militares. El problema —señala— "es qué va a pasar cuando se vayan, porque no se van a quedar aquí para siempre. ¿o sí?"

UN CÁRTEL INDÍGENA Y UNA COPIA DE LAS MARAS

En medio de la muchedumbre que acude todos los días al Mercado de Santo Domingo de San Cristóbal de las Casas, en el centro de la llamada Ciudad Real, tres muchachitos de entre 15 y 19 años cazan a su siguiente presa desde una esquina.

Las radios de comunicación, la pistola en esas bolsas que se conocen como "mariconeras" y una motocicleta para huir a toda velocidad son las características de dichas células criminales que operan en esta ciudad colonial.

Algunos los conocen como "Los Motonetos". Otros, sencillamente, como el "brazo armado" del grupo criminal "Sentimientos de la Nación", pero también como "los sicarios" del llamado Cártel de San Juan Chamula (CSJC),

la primera organización de la delincuencia organizada indígena del país.

Operan como las maras salvadoreñas (Mara Salvatrucha y Barrio 18) porque, dicen policías de este municipio, comerciantes y pobladores, "son adiestrados por estos pandilleros centroamericanos y han provocado, incluso, la parálisis total de la ciudad en varias ocasiones". Algunos de estos jóvenes, incluso, ya ostentan tatuajes en la cara con las siglas del cártel indígena o del grupo "Sentimientos de la Nación".

El CSJC y sus redes criminales controlan desde hace casi una década este centro neurálgico en el trasiego de drogas, armas, migrantes y huachicol.

Y es que San Cristóbal de las Casas, ubicado en el corazón de los Altos de Chiapas, es el punto estratégico para dispersar los negocios delictivos en tres corredores estratégicos: el que va hacia el Golfo de México, vía Palenque y Villahermosa; el que va hacia el Pacífico, vía Tuxtla Gutiérrez, y el que va hacia el centro, vía Veracruz y Oaxaca.

La existencia del primer cártel indígena incluso ha sido reconocida por el propio gobierno federal. En noviembre de 2021 Ricardo Mejía Berdeja, reconoció la existencia del CSJC y a principios de julio hizo lo propio el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Un fenómeno que se dio a partir del surgimiento de esta organización criminal —que según pobladores de San Juan Chamula y de San Cristóbal de las Casas inició a partir del gobierno de Juan Sabines (2006-2012), hoy cónsul de México en Orlando, Florida, y se exacerbó en las administraciones del hoy aspirante presidencial de Morena-PVEM-PT, Manuel Velasco (2012-2018) y de Rutilio Escandón (2018-2024)— ha sido la desmedida construcción de extravagantes casas de entre dos y cuatro pisos (muchas de ellas deshabitadas) en las inmediaciones de San Juan Chamula, que supuestamente pertenecen a los líderes de este grupo delictivo.

Policías municipales y elementos de Protección Civil de San Cristóbal de las Casas consultados dicen que los principales negocios del CSJC y de uno de sus "brazos armados", "Los Motonetos", son el tráfico de drogas, armas, migrantes y huachicol, aunque en la zona urbana de esta ciudad se dedican al "cobro de piso", secuestro, narcomenudeo, asalto a mano armada a negocios y personas, y extorsión.

Otra práctica de estos grupos es la trata de personas, que ha derivado en un preocupante fenómeno que ha sido llamado "etno-pornografía", en el que jóvenes indígenas de entre 14 y 18 años son secuestradas y forzadas a tener relaciones sexuales mientras son grabadas. El material de estas grabaciones es vendido clandestinamente en los tianguís y mercados de San Cristóbal de las Casas y San Juan Chamula.

LOS PARAMILITARES TIRAN A MATAR



Las balas de las armas de alto poder, de los rifles de asalto que disparan los miembros del grupo paramilitar Organización Regional de Cafecultores de Ocosingo (ORCAO) pasan zumbando, un día sí y el otro también, los techos de zinc de la casa de ese hombre con semblante de terror, al que rodean cuatro de sus hijas e hijos, todos menores de edad.

Las ráfagas salen de entre las milpas y la maleza, a escasos trescientos metros de esa vivienda que está justo a la entrada de la comunidad autónoma Moisés y Gandhi, que forma parte de las bases de apoyo del EZLN.

El hombre, a quien no conviene preguntarle por su nombre ni por ningún detalle relacionado con su persona, señala hacia el punto exacto de donde vienen las agresiones y dibuja con la mano derecha la trayectoria de los proyectiles.

Por lo pronto, todos los caracoles y los municipios autónomos zapatistas en Chiapas se encuentran en "alerta máxima" por este tipo de ataques.

El caracol de Oventic, por ejemplo, uno de los puntos más importantes y significativos de la organización rebelde, ubicado a unos quince kilómetros de San Andrés Larráinzar, en la región de Los Altos, está cerrado para cualquier persona que no pertenezca a las bases zapatistas.

"Son instrucciones de la comandancia y de las asambleas", dice el muchacho que cuida el acceso al caracol de Oventic.

Unos kilómetros más al norte, también en la zona de los Altos, en las comunidades de Santa Martha, Aldama, Chalchihuitán, San Andrés Duraznal y Chapultenango, en el municipio de Chenalhó, casualmente cercanos a Acteal, los grupos paramilitares también han sembrado el terror, lo que ha orillado decenas de desplazamientos forzados.

Las tácticas de estas organizaciones paramilitares —coinciden pobladores y defensores de derechos humanos en Chiapas— no son las mismas que se dieron en la década de los noventa, tras el levantamiento del EZLN, época en que tenían presencia grupos como Los Chinchulines, Paz y Justicia o Máscara Roja, financiados por caciques pristas de la entidad y entrenados por el Ejército.

Ahora estos grupos cuentan con un ingrediente especial que —dicen pobladores y organizaciones civiles— "coinciden con las prácticas de los grupos del crimen organizado, así como de las técnicas de contrainsurgencia que se implementaron en Centroamérica, especialmente en Guatemala, para arrasar a las comunidades que apoyaban a la guerrilla".

LA TRAGEDIA MIGRANTE

Ahí viene de regreso Eliseo, el balseiro de 16 años que todos los días va y viene de Tecún Umán, Guatemala, a

Frontera Hidalgo, México, cargado de migrantes de diversas nacionalidades.

Viene agotado, harto sudoroso. Ya le cuesta trabajo dominar la corriente del Río Suchiate. El palo de balsa ya lo levanta con desgana. Ahí viene el chamaco chapín, ahora con una familia de venezolanos.

Pero son cuatro: el padre, la madre y dos niños, es decir, cuatro viajes de a 40 quetzales cada uno (unos 25 pesos mexicanos). Eso parece tranquilizarlo ya a unos metros de la ribera del lado chiapaneco.

La familia, nada más pisar tierra mexicana, corre hacia los pasillos de un conjunto de bodegas que está a unos metros del afluente. En la primera calle se encuentran con el "pollero" que los llevará a un lugar impreciso del territorio nacional. Suben a un automóvil blanco y se pierden entre las calles de esta ciudad fronteriza.

Los 160 quetzales que se ganó Eliseo en este cruce no tienen nada que ver con las sumas de dinero que manejan los "polleros" —quienes a su vez están ligados a grupos criminales o a cárteles del narcotráfico— para supuestamente llevar a esos migrantes a la frontera norte.

"De 15 mil a 20 mil dólares el viaje", coinciden otros balseiros a las orillas del Suchiate.

Por ello se habla por estos lares de que la diversificación de los negocios ilícitos de las bandas criminales se han potencializado al grado de que el tráfico de drogas ya pasó a un segundo plano.

Otros migrantes, desesperados, con rostros de dolor, angustia y tristeza, mucha tristeza, optan el puesto migratorio instalado a un costado de las escalinatas que van del Suchiate a la calle Primera Poniente. Los más son los haitianos, pero también hay salvadoreños, colombianos, cubanos, ecuatorianos, hondureños... y uno que otro ruso o chino.

Ahí se entregan a las autoridades migratorias y, algunos, sólo algunos que son mencionados en una interminable lista, que es un primer filtro, abordan autobuses del Instituto Nacional de Migración (INM) que los acercan a Tapachula, a Arriaga, a Tuxtla Gutiérrez, a distintos campamentos que se encuentran sobre las carreteras chiapanecas, para definir su situación migratoria.

Jairo, un muchacho de 30 años, oriundo de Frontera Hidalgo, que transporta en una motocicleta abarrotes que compran comerciantes guatemaltecos del lado mexicano y luego lo venden en su país, porque "acá sale más barato" —dice que es bien sabido que los migrantes que optan por los "polleros" son los que corren los mayores riesgos.

"Si bien les va, los abandonan en cualquier lugar del país, luego de extorsionarlos. Otros son secuestrados o víctimas de trata. También se sabe que hay reclutamientos forzados para formar parte del crimen organizado o para realizar trabajos forzados, casi como esclavos".

Jairo narra las historias que cuentan aquí y allá los miles de migrantes que han cruzado por este punto. La



intensa humedad que emana del Suchiate ataranta y provoca mareos. La humedad hace más pesada la tristeza, pero disimula mejor una lágrima con una gota de sudor.

A lairo nada le es ajeno. Vibra y se indigna con esta crisis humanitaria. "Nací aquí. Tengo treinta años y nunca vi este dolor de tantos seres humanos". Señala hacia el norte, hacia tierra adentro, hacia el territorio chiapaneco. Contiene el llanto: "Y todavía todo lo que les espera allá adelante. Hasta parece que estamos en guerra". ■

***"Unos dan 'pitazos',
otros almacenan, otros
compran y venden,
otros transportan. Ya
muchos andan
armados. Nomás es
cuestión de fijarse bien.
Aquí los conocemos y
conocemos a los de
poblaciones cercanas.
¿Y cómo no va a ser
así? Por acá hay
muchas necesidades.
Eso ellos lo
aprovechan"
"Nací aquí.
Tengo treinta
años y nunca vi
este dolor de
tantos seres
humanos"***

AMLO Y RUTILIO SON OMISOS Y CÓMPLICES: FRAYBA

RIVELINO RUEDA/ENVIADO ESPECIAL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.- Ante la omisión de los gobiernos federal y estatal por la grave situación de violencia que atraviesa Chiapas, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Dora Lilia Robledo García, señala que esta actitud de las autoridades también conlleva a una responsabilidad o a una complicidad.

La defensora de derechos humanos menciona que, "al no querer ver o atender este tipo de problemáticas, lo único que hace pensar es que hay una alianza de estos gobiernos con los grupos generadores de violencia en el estado".

Tanto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como el del mandatario estatal, Rutilio Escandón Cárdenas, apunta, utilizan el mismo discurso, sobre todo el de decir "no pasa nada", "todo está tranquilo".

Destaca que el presidente fue a Chiapas a una conferencia mañanera en Tuxtla Gutiérrez (el 23 de junio) a decir que "todo está bien en el estado", pero en el Frayba "lo invitamos a que si quiere conocer la situación de la entidad, realmente venga a las comunidades, municipios y poblados que están padeciendo esta violencia".

Pero lo que más preocupa --añade-- es que "ni López Obrador ni Rutilio Escandón estén escuchando al pueblo, porque es el pueblo el que está denunciando, es el pueblo el que está diciendo lo que está pasando y lo que está padeciendo".

"El presidente y el gobernador no ven, o no quieren ver, que en Chiapas hay desplazados, gente desaparecida, prácticas de tortura de autoridades, organizaciones del crimen organizado cada vez con más presencia territorial y con más base social, grupos paramilitares, homicidios, y no lo ven o no lo quieren ver porque eso implicaría reconocer y atender esa situación".

Sobre las declaraciones que hizo López Obrador en su última gira a Chiapas, acusando a las organizaciones de derechos humanos del estado de estar en contra de su gobierno y de ser financiadas desde el extranjero, Dora Robledo menciona que "el mensaje que deja el presidente es preocupante, porque no es más que una amenaza, además de que estos señalamientos representan un alto riesgo al trabajo que realizamos". ■



CHIAPAS ESTÁ EN GUERRA: IGLESIA CATÓLICA

RIVELINO RUEDA/ENVIADO ESPECIAL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. - La descomposición social en Chiapas por la espiral de violencia que se ha dado en el estado en los últimos meses no sólo ha sido denunciada y alertada por la población y organizaciones de derechos humanos. La iglesia católica también ha levantado la voz ante los "focos rojos" que se han encendido en distintas regiones de la entidad.

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a cargo de monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, ha advertido, incluso, que en Chiapas "estamos en tiempo de guerra".

"Nos preocupa el incremento de la violencia en los diferentes municipios, la inseguridad, migración, abandono del campo, desapariciones forzadas, feminicidios, trata de personas, despojo de nuestras tierras y territorios, provocando temor, terror, pánico, desplazamiento forzado interno y desestabilización social, cultural, económica, política, religiosa, paralizando la sociedad en general, deteriorando el tejido social".

La situación ha orillado, en otros casos, a que los templos cierren sus puertas por la escalada de violencia. Es el caso de la iglesia de la Santa Catarina de Pantelhó.

En un recorrido que hizo **El Sol de México** en este municipio, hoy tomado por elementos del Ejército, la Guardia y la Policía Estatal, se pudo constatar este fenómeno. En el recinto, un hombre de unos treinta años se apresuró a echar candado a la reja de entrada a la parroquia y apresurar el paso ante las preguntas.

Sólo una manta fue desplegada en el exterior de la iglesia: "No a la violencia. No al alcoholismo. No a las drogas y no al crimen organizado".

El 3 de julio, en la alcaldía de Frontera Comalapa, unos cuatro mil feligreses católicos realizaron una peregrinación por las principales calles del municipio.

Luego, en un acto religioso en la iglesia del Santo Niño de Atocha, los pobladores oraron por el regreso de la paz a esta región, donde se dieron cruentos enfrentamientos a finales de mayo entre los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CING), que orilló al desplazamiento de unas tres mil personas por la situación de violencia en la zona. ☹



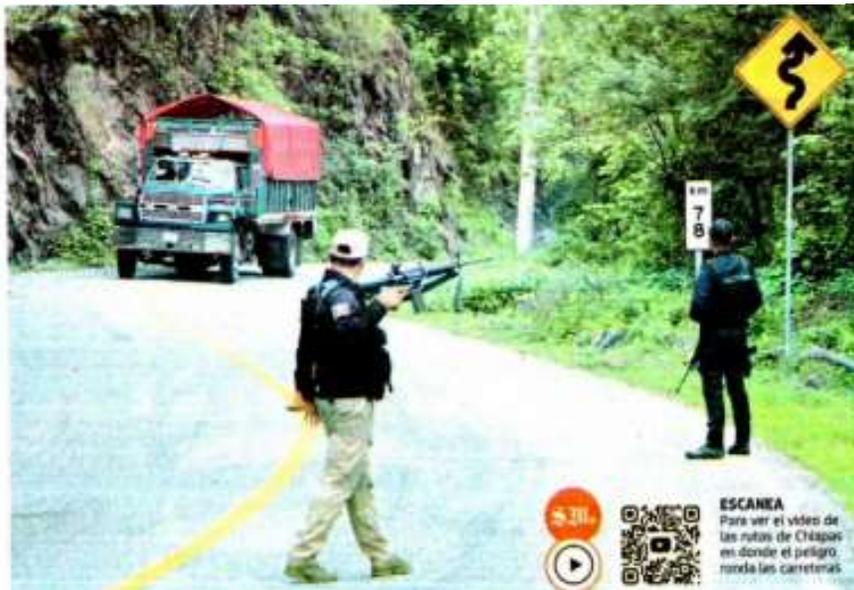
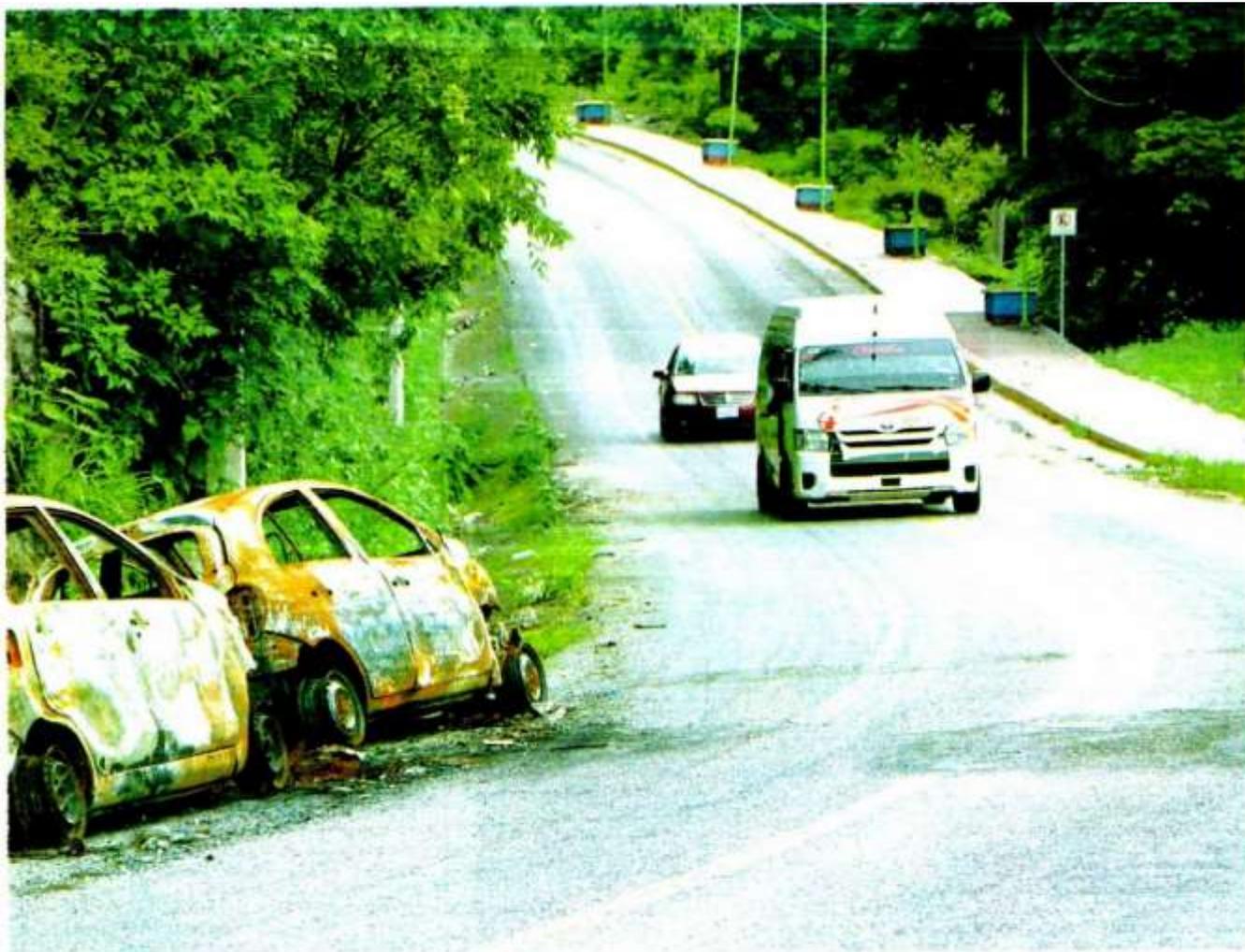
PERIÓDICO
El Sol de México

PÁGINA
PP-1-5-12

FECHA
30/07/2023

SECCIÓN
NACIONAL





ESCANEA
Para ver el vídeo de
las matas de Chiapas
en donde el peligro
ronda las carreteras



PERIÓDICO

PÁGINA

FECHA

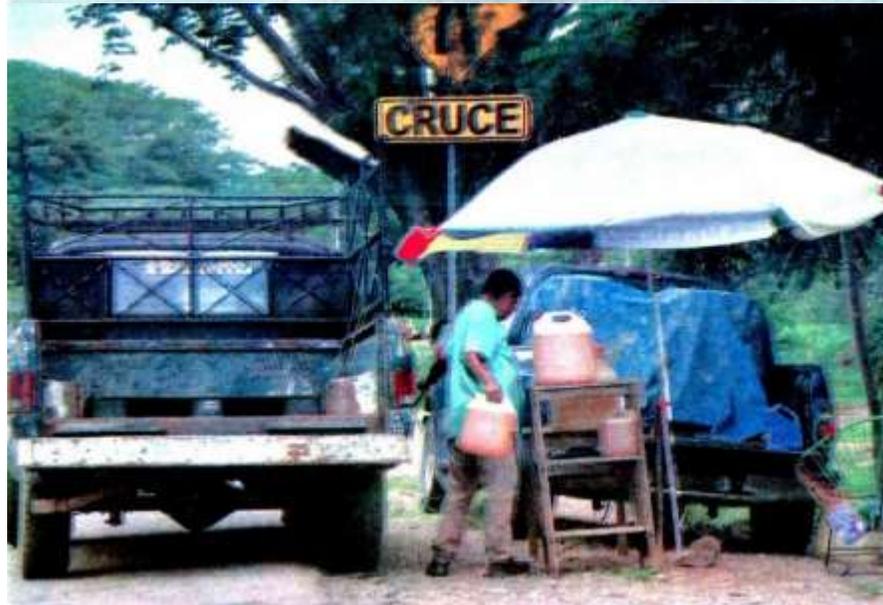
SECCIÓN

El Sol de Mexico

PP-1-5-12

30/07/2023

NACIONAL





PERIÓDICO

PÁGINA

FECHA

SECCIÓN

El Sol de México

PP-1-5-12

30/07/2023

NACIONAL

